



## COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

DON JAIME VELAZQUEZ VIOQUE, Secretario del Consejo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, en uso de las competencias que le otorga el artículo 40 del Reglamento de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, aprobado por Real Decreto 1994/1996, de 6 de septiembre,

### CERTIFICA:

Que en la Sesión del Consejo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones celebrada el día 15 de abril de 2004, se ha adoptado el siguiente

### ACUERDO

Por el que se aprueba la:

**RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR LA ENTIDAD TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. CONTRA LA RESOLUCIÓN DE 18 DE DICIEMBRE DE 2003 POR LA QUE SE FIJAN LOS PRECIOS DE INTERCONEXIÓN DE TERMINACIÓN EN LA RED DE RETEVISIÓN MÓVIL, S.A. (MTZ 2003/1386).**

En relación con el recurso de reposición interpuesto por la citada entidad contra la Resolución de fecha 18 de diciembre de 2003 sobre la fijación de los precios de interconexión de terminación en la red del citado operador móvil (MTZ 2003/1386), el Consejo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones ha adoptado, en su sesión núm. 13/04 del día de la fecha, la siguiente Resolución:

Resolución de 15 abril de 2004, recaída en el expediente AJ 2004/241.

### HECHOS

**PRIMERO.-** Con fecha 26 de junio de 2003 se aprobó la Resolución sobre la verificación de los resultados de la contabilidad de costes presentados por la entidad Telefónica Móviles España, S.A.U. referidos a los ejercicios 2000 y 2001.

**SEGUNDO.-** Con fecha 18 de diciembre de 2003, el Consejo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones dictó Resolución por la que se fijaban los precios de interconexión de terminación en la red de la empresa Retevisión Móvil, S.A. (MTZ 2003/1386).

En la parte dispositiva de la mencionada Resolución se estableció lo siguiente:



## COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

**“Primero.-** Fijar el precio medio máximo del servicio de interconexión de terminación de voz de Retevisión Móvil, S.A. en 0,177572 euros/minuto a partir del 31 de enero de 2004, calculando este precio medio conforme a los ponderadores establecidos en el Anexo II y teniendo en cuenta que los precios nominales aplicados en cada franja horaria deben ser en función de los costes de dicha franja horaria.

Hasta el 31 de enero de 2004, seguirá vigente lo dispuesto en la medida cautelar adoptada en el presente procedimiento el 2 octubre de 2003.

**Segundo.-** Retevisión Móvil, S.A. habrá de aplicar las mismas franjas horarias y los mismos precios nominales en cada una de ellas en la prestación de su servicio de interconexión de terminación de voz a todos los operadores interconectados.

**Tercero.-** Los precios nominales y las franjas horarias establecidas en el Anexo II que dan lugar a través de la aplicación de los ponderadores al precio medio máximo fijado para el servicio de interconexión de terminación de voz, deberán ser ofrecidos por Retevisión Móvil, S.A. a todos los operadores interconectados a partir del 31 de enero de 2004.

Los nuevos precios de interconexión de terminación en la red de Retevisión Móvil, S.A. modificarán los Acuerdos Generales o Addenda vigentes entre Retevisión Móvil, S.A. y otros operadores, previa solicitud escrita de éstos a Retevisión Móvil, S.A. La modificación entrará en vigor desde la fecha de notificación de la solicitud y, en el plazo de cinco días laborables a contar desde la notificación a Retevisión Móvil, S.A., esta entidad y el operador solicitante formalizarán por escrito el texto que corresponda con el objeto de la aceptación.

**Cuarto.-** Retevisión Móvil, S.A. no podrá modificar las franjas horarias y los precios nominales recogidos en el Anexo II sin la previa aprobación y, en su caso, recálculo de los ponderadores por parte de esta Comisión, siguiendo el mecanismo y los plazos generales establecidos en la normativa vigente.”

**TERCERO.-** Con fecha 5 de febrero de 2004 tuvo entrada en el Registro de esta Comisión escrito de 29 de enero de 2004 del representante de Telefónica de España, S.A.U. (en adelante Telefónica de España) en virtud del cual interpone recurso de reposición contra la Resolución de fecha 18 de diciembre de 2003 a la que se refiere el antecedente segundo.

La entidad solicitante muestra su disconformidad con la Resolución impugnada alegando la nulidad de pleno de derecho de la misma por incurrir en las causas previstas en el artículo 62.1 a) y e) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento Administrativo Común (en adelante LRJPAC), así como por causar perjuicios a los usuarios y operadores de telefonía fija.



## COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

En concreto, y con base en el artículo 62.1.a) de la LRJPAC, la recurrente considera que la Resolución recurrida adolece de nulidad de pleno derecho por infringir el artículo 24 de la Constitución Española. Dicha vulneración se ha producido al declararse por esta Comisión la confidencialidad de los anexos presentados por Retevisión Móvil, S.A., impidiendo con ello el ejercicio legítimo de su derecho de defensa al no obtener la información necesaria para formular eficazmente sus alegaciones. Asimismo, considera nula de pleno derecho la Resolución impugnada por haberse dictado prescindiendo totalmente del procedimiento legalmente establecido (artículo 62.1.e) de la LRJPAC), al no haberse motivado debidamente la declaración de confidencialidad de aquéllos documentos del citado operador móvil.

Respecto a los supuestos perjuicios que se causan con la referida Resolución, la entidad recurrente alega que con la determinación de los precios de terminación se perjudica, por un lado, a los abonados del servicio telefónico fijo *“por continuas y reiteradas modificaciones en los precios, que además constituirán una posible discriminación frente a los abonados de telefonía móvil provocando una posible pérdida de tráfico ante el desconcierto que genera la movilidad continua de precios”* y, por otro lado, a los operadores de redes fijas que, como dice la propia recurrente, *“podrían tener un perjuicio”* en relación con su imagen respecto a sus clientes que tendrán que comunicar y cobrar tales precios de terminación, así como comunicarles las modificaciones de precios que pueden ser al alza o a la baja.

Por último, considera que los precios de terminación que han de abonar los operadores fijos a los operadores móviles por las llamadas fijo-móvil deben calcularse no llamada por llamada, sino aplicando la media ponderada que corresponda a cada operador en función de los precios establecidos por el operador móvil y del número de llamadas que terminen en su red, ya que en este caso, el operador de telefonía fija no tendría la presión de trasladar de inmediato al cliente la modificación de las tarifas en todos los casos.

En atención todo lo anterior, la entidad recurrente solicita:

- Que se declare la nulidad de pleno derecho de la Resolución impugnada o, subsidiariamente, se apruebe la propuesta del sistema de ponderación para el pago de los precios de terminación a los operadores móviles.
- En su defecto, que se mantenga en todos sus términos la medida cautelar dictada por la Comisión con fecha 3 de octubre de 2003, fijando los precios de interconexión por terminación móvil orientados a costes para cada una de las franjas horarias.

**CUARTO.-** Mediante escritos del Secretario de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones de fecha 12 de febrero de 2004, se notificó a todas las



## COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

entidades interesadas en el procedimiento del que trae causa el referido recurso y se dio traslado de una copia del mismo para que en el plazo de diez días alegasen cuanto estimasen procedente.

Finalizado el plazo conferido al efecto, tan sólo han presentado escrito de alegaciones las entidades Vodafone España, S.A. y Retevisión Móvil, S.A.

**QUINTO.-** Con fecha 27 de febrero de 2004, Vodafone España, S.A. (en adelante Vodafone) presenta escrito de alegaciones contra el recurso de Telefónica de España, en el que se pone de manifiesto su total desacuerdo con los argumentos expuestos por Telefónica de España, en particular, con los motivos tercero (sobre los daños y perjuicios ocasionados por la resolución impugnada) y cuarto (sobre cuál debería ser el contenido de la resolución) de su recurso.

Señala Vodafone que no existen tales daños y la medida que propone Telefónica de España relativa a establecer una tarifa única, sin distinción de franjas horarias y diferentes para cada operador interconectado, no puede admitirse por las siguientes razones:

### **1ª.- Injustificación de la medida propuesta.**

Con carácter previo, Vodafone considera totalmente infundada la conclusión a la que llega Telefónica de España de que un operador móvil puede estar interesado en modificar de manera sistemática y frecuente sus tarifas de terminación, cuando la realidad demuestra que su ingreso medio debe permanecer constante, siendo destacable el hecho de que la modificación de tarifas es un proceso complejo para el operador que tenga una red a la que estén conectados muchos operadores.

Vodafone considera que dicha conclusión de Telefónica de España se basa en que todo cambio de tarifas de interconexión de algún operador móvil conlleva necesariamente una modificación de sus tarifas de cliente para el servicio fijo a móvil. Frente a ello, Vodafone señala que dicho argumento es consecuencia de una errónea interpretación de la obligación de no discriminación en la retención percibida en las llamadas de fijo a móvil, en virtud de la cuál ha de establecerse un mismo precio por la parte que corresponda a la remuneración de la red fija, con independencia de la red móvil en que terminen las llamadas.

Entiende Vodafone que esta obligación no debe cumplirse de forma individual en cada franja horaria y para cada operador, como entiende Telefónica de España, sino según la media ponderada de las franjas horarias existentes, de modo que un cambio concreto de tarifas de terminación de uno de los tres operadores móviles tendrá previsiblemente un efecto nulo o despreciable en la retención media de Telefónica de España, no siendo, por tanto, necesario el consiguiente cambio en las tarifas de cliente de la operadora de telefonía fija.



## COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

### **2ª.- La medida propuesta supondría una limitación adicional a la ya escasa libertad comercial de Vodafone.**

Se alega que admitir la propuesta de Telefónica supondría una importante merma de la libertad comercial de los operadores móviles, ya que el establecimiento de una tarifa única unificando las franjas horarias (pico y valle) impediría a aquéllos modular la distribución del tráfico en su red estableciendo precios más reducidos en las horas de menos tráfico, lo que a su vez conllevaría una concentración de las llamadas en aquellas franjas de tráfico más intenso. A juicio de Vodafone, lo que pretende ese operador fijo es trasladar sus limitaciones como operador dominante a terceros operadores hasta el punto de condicionar la estructura de las tarifas de interconexión de los operadores móviles.

### **3ª.- La medida propuesta supondría el incumplimiento por parte de Vodafone del principio de no discriminación.**

Señala Vodafone que la propuesta de Telefónica implicaría que los operadores móviles ofreciesen precios diferentes para cada operador en función de su perfil de tráfico, lo que contradice el principio de no discriminación y difiere notablemente del contenido de la Resolución impugnada, que obliga a Vodafone a aplicar las mismas tarifas a todos los operadores interconectados.

Por todo lo expuesto, Vodafone solicita que se admita su escrito y se dicte Resolución desestimando íntegramente la solicitud de Telefónica.

**SEXTO.-** Con fecha 5 de marzo de 2004 la entidad Retevisión Móvil, S.A. (en adelante Amena) presenta ante esta Comisión escrito en virtud del cual efectúa alegaciones al recurso presentado por Telefónica de España.

Amena muestra su disconformidad con base en las siguientes alegaciones:

### **1ª.- Sobre la necesidad de mantener la confidencialidad de los Anexos II y III de la Resolución de 18 de diciembre de 2003, por la que se fijan los precios de interconexión de terminación en la red de Amena.**

Frente a la argumentación esgrimida por la recurrente, según la cual la confidencialidad no es aplicable a operadores como Telefónica de España, que no concurren en el mercado de telefonía móvil y que pueden verse afectados por los precios de terminación, señala Amena que las llamadas de fijo a móvil tienen lugar en el mercado de servicios de telecomunicaciones a clientes finales en el que compiten todos los operadores, tanto fijos como móviles, de modo que a medida que los precios de los servicios de terminación en redes móviles van descendiendo la competencia entre todo tipo de operadores es mayor.



## COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

Además, tampoco Amena conoce si la traslación de los precios de interconexión a los precios finales a clientes, llevada a cabo por TESAU, es correcta o no, ya que los ponderadores fijados por la operadora para la verificación del price cap también tienen carácter confidencial para el resto de los operadores.

En cualquier caso, entiende Amena que si hay un agente en el mercado que tenga acceso a todo tipo de datos de tráfico es Telefónica de España, por lo que sería suficiente con acudir a sus estadísticas para tener un conocimiento aproximado de la información que solicita.

### **2ª.- Sobre los efectos del desconocimiento de los datos de los Anexos II y III en las ofertas comerciales de Telefónica de España.**

Señala Amena que no cabe confundir el proceso de aprobación de las tarifas fijo-móvil y de las ofertas comerciales de Telefónica de España, con el proceso de orientación a costes de las tarifas de interconexión, aunque estén relacionados entre ellos. Alega el citado operador móvil que la Resolución de 18 de diciembre de 2003 viene a establecer la validez de los precios nominales fijados en la Resolución de 2 de octubre del mismo año, si bien permite a los operadores móviles establecer otros precios o bandas horarias, ajustándose al precio medio, previa aprobación por la Comisión.

Por tanto, sólo podría darse un cambio en las ofertas comerciales de Telefónica de España, debido a la modificación de los precios de terminación en redes móviles, si los operadores móviles decidiesen modificar las tarifas o franjas horarias establecidas en la Resolución. En este caso, Telefónica de España debería recibir una oferta en tal sentido previamente aprobada por la Comisión, disponiendo de tiempo suficiente para cambiar sus precios.

### **3ª.- Sobre los daños y perjuicios causados por la Resolución impugnada.**

Amena considera que los inconvenientes que pudieran derivarse para Telefónica de España de una variación en los precios de terminación, tales como la modificación de las tarifas a los clientes, el posible aumento de las reclamaciones por las subidas de precios o las gestiones internas a acometer como consecuencia de los cambios, son actividades propias que deben desarrollar cualquier operador, sin que dichas gestiones puedan considerarse como daños o perjuicios susceptibles de resarcimiento. A su entender, el único perjudicado habría sido el operador móvil que ha visto reducido considerablemente sus precios de terminación, y lejos de verse perjudicada Telefónica de España, se benefician sus clientes a costa de esfuerzos económicos de terceros.





## COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

Además, se pone de manifiesto que Telefónica de España todavía no ha formalizado los correspondientes acuerdos ofrecidos por Amena tras la adopción por parte de la Comisión de la medida cautelar de 2 de octubre de 2003. Asegura en este sentido que aún no ha recibido respuesta de la recurrente, aportando como documentos adjuntos las cartas enviadas a Telefónica con el fin de consolidar su relación con la operadora fija en interconexión.

### **4ª.- Sobre el contenido de la Resolución del expediente que propone Telefónica.**

A su entender, lo que parece deducirse de la propuesta planteada por Telefónica de España es que sea este operador fijo quien pase a controlar y supervisar los ponderadores de tráfico terminados en la red móvil, y con origen en la red fija, para fijar en función de los mismos la retribución a percibir por cada uno de ellos.

La entidad Amena se opone a la propuesta de Telefónica de España por cuanto que son los operadores titulares de las redes de telefonía móvil, y no los operadores fijos, quienes están habilitados para establecer los precios y las franjas horarias por la terminación de llamadas en su red, respetando los precios medios máximos fijados por la Comisión. De lo contrario, dependería de otro operador (en este caso de Telefónica de España) el control y la supervisión de los ponderadores de tráfico, función que, sin embargo, corresponde a la Comisión. Además, sería Telefónica de España quien determinaría los horarios de mayor o menor tráfico en la red móvil y se estarían fijando en la práctica precios de interconexión diferentes en función del operador origen.

**SÉPTIMO.-** Por último, y en contestación a la petición de suspensión formulada por Telefónica de España en su recurso, con fecha 11 de marzo de 2004 esta Comisión dicta Resolución por la que deniega la mencionada suspensión de la Resolución de 18 de diciembre de 2003 recurrida.

A los anteriores antecedentes de hecho les son de aplicación los siguientes

## **FUNDAMENTOS DE DERECHO**

### **I. FUNDAMENTOS JURÍDICOS PROCEDIMENTALES.**

#### **PRIMERO.- Calificación.**

El artículo 107 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en adelante LRJPAC), establece que contra las resoluciones podrán interponerse por los interesados los recursos de alzada y potestativo de reposición, que



## COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 62 y 63 de dicha Ley.

La entidad Telefónica de España califica expresamente su escrito de 5 de febrero de 2004 como recurso de reposición, por lo que teniendo en cuenta lo anterior y que las Resoluciones de esta Comisión ponen fin a la vía administrativa, procede a tenor de lo establecido en el artículo 116 de la LRJPAC, que prevé que los actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa podrán ser recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los hubiera dictado, calificar el escrito presentado como recurso potestativo de reposición que se interpone contra la Resolución de esta Comisión de 18 de diciembre de 2003.

### **SEGUNDO.- Competencia para resolver.**

La competencia para resolver el presente recurso corresponde, de conformidad con lo establecido en el artículo 116 de la LRJPAC, al Consejo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, por ser el órgano administrativo que dictó el acto impugnado.

### **TERCERO.- Admisión a trámite.**

El presente recurso ha sido interpuesto cumpliendo con todos los requisitos de forma establecidos en el artículo 110.1 de la LRJPAC, por lo que, teniendo en cuenta lo anterior, procede admitir a trámite el mismo.

## **II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS MATERIALES.**

### **Primero.- Sobre la supuesta vulneración al derecho a la defensa y la falta de motivación de la Resolución recurrida.**

La empresa Telefónica de España impugna la Resolución de 18 de diciembre de 2003 solicitando la nulidad de pleno derecho de la misma por incurrir en las causas previstas en el artículo 62.1 a) y e) de la LRJPAC.

La entidad recurrente considera que, al declararse la confidencialidad de los anexos presentados por Amena, la Resolución impugnada le ha impedido el ejercicio pleno de su derecho de defensa al no obtener la información necesaria para formular eficazmente sus alegaciones. Asimismo, considera nula de pleno derecho la Resolución impugnada por no haberse motivado debidamente la declaración de confidencialidad de aquéllos documentos del citado operador móvil.

Telefónica de España pretende conocer la información incluida en el anexo II de la Resolución de 18 de diciembre de 2003 y, a su juicio, no concurren los





## COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

elementos necesarios para declarar su confidencialidad por los siguientes motivos:

- La información podría ser confidencial, en su caso, para aquellos operadores que actúan en el mismo mercado que el operador que aporta la información, en este caso el mercado de telefonía móvil.
- En el supuesto de un conflicto de interconexión, Telefónica de España se encontraría en situación de desventaja al desconocer los criterios seguidos para la determinación de los precios.
- El precio que satisface el usuario de telefonía fija, se divide en dos componentes: la retribución a la red fija y la del operador móvil. Las modificaciones en los precios de terminación alterarían la estructura de los precios finales y se impediría repercutir tales modificaciones a sus clientes finales.

Con carácter previo, cabe recordar que la Resolución recurrida consideró a los anexos II y III necesariamente confidenciales y, consecuentemente con ello, motivó suficientemente las razones por las que tomó tal decisión.

Además, durante la tramitación del expediente del que trae su causa el presente recurso, la entidad recurrente nada alegó a este respecto sobre la ahora cuestionada confidencialidad, a diferencia de la entidad UNI2 Telecomunicaciones. Por ello, carece de todo valor la supuesta indefensión que se pretende hacer valer ahora en vía de recurso. Por otra parte, y en cuanto a la falta de motivación en la declaración de confidencialidad, tan solo cabe recordar a la recurrente que, precisamente, en contestación a la única empresa que cuestionó la confidencialidad de tales datos, la Resolución impugnada argumentó ampliamente y de forma clara los motivos por lo que considera dicho carácter confidencial (páginas 39 y 40).

En contestación a las alegaciones vertidas de contrario, cabe señalar que la Resolución impugnada no viene a regular directamente los precios de terminación del operador móvil según bandas horarias y precios nominales, sino que se limita a fijar un precio medio objetivo, dejando al operador móvil libertad para establecer precios nominales y la distribución de las bandas horarias. Este criterio resulta alineado con el principio de mínima intervención que establece el artículo 10.4 de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones.

El ejercicio del establecimiento de unos precios nominales y bandas horarias del servicio de terminación de llamadas puede llegar a suponer una intervención con consecuencias en otros mercados, como es el de servicio cliente final móvil, y una limitación innecesaria al operador móvil. Ahora bien, (1) los ponderadores se obtienen a partir del tráfico entregado por los operadores interconectados con terminación en los operadores móviles, (2) los operadores fijos y los operadores móviles son los que generan el tráfico de



## COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

terminación en los operadores móviles. De este modo, a partir de los ponderadores se conoce el tráfico según horario de los operadores interconectados. Además, según el tráfico, se puede tener información sobre la estrategia empresarial de los operadores y ello es independiente del mercado en el que actúa. Por tanto, se ha de rechazar el argumento de Telefónica de España relativo a que la confidencialidad solo es aplicable a los operadores que actúan en el mercado de telefonía móvil.

De cualquier modo, para evitar situaciones de inseguridad frente al posible desconocimiento de los precios a pagar por terminación en las redes de los operadores móviles, la citada Resolución establece en su resuelve tercero unos precios ciertos y, seguidamente en su resuelve cuarto, un mecanismo de modificación de tales precios, con el objetivo de que los operadores interconectados conozcan con antelación suficiente los precios ofrecidos por los operadores móviles, siendo esta Comisión garante de que los precios propuestos son los correctos.

Ahora bien, para conocer cómo afectan posibles reducciones en los distintos horarios no basta con conocer el tráfico agregado de todos los operadores en los distintos horarios, sino que es necesario desagregar por cada tráfico, tal y como se realiza en el anexo II de las Resoluciones recurridas. Así, como se explica en el anexo I (no confidencial), se debe desagregar el tráfico según las bandas horarias con un nivel de detalle suficiente.

En anexo II se incluye tanto el tráfico de interconexión desde Telefónica de España a los operadores móviles, como el de terminación de los operadores móviles entre sí, así como los tiempos medios de terminación por llamada según horario. Resulta claro que dicha información se considera confidencial porque desvela parcialmente la estrategia empresarial de cada operador interconectado al observarse los porcentajes de tráfico según horario y el tiempo medio de cada llamada. De esta manera, manteniéndose confidenciales dichos parámetros, se protege la estrategia empresarial no sólo de la propia Telefónica de España sino también del resto de operadores interconectados con Amena.

A mayor abundamiento, la recurrente no critica el método expuesto en el anexo I, tan sólo afirma que es complejo. De esta manera, partiendo de la premisa de que el método es adecuado, solo podría dar un resultado erróneo si se utilizaran datos incorrectos.

Pues bien, para la elaboración de las tablas del anexo II, esta Comisión ha solicitado los tráficos de terminación en Amena y los ha cruzado y comprobado con el tráfico entregado por este operador y Telefónica de España. A partir de los datos comprobados se elabora el anexo II, y Amena puede comprobar la correcta aplicación por parte de esta Comisión del anexo I.



## COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

Es más, como el tráfico de terminación de cada operador móvil es confidencial, aunque Telefónica de España conociera los ponderadores, no podría conocer si son correctos al ser confidenciales los tráficos de los demás operadores competidores con dicha entidad.

Por último, respecto de los componentes y las retribuciones que se deben imputar los operadores fijos, trasladándose o no a una posible reducción de sus precios finales, tales cuestiones quedan fuera del ámbito de este expediente y dependerán de las circunstancias particulares de cada operador fijo, no solo Telefónica de España, y de sus objetivos empresariales.

En definitiva, no se puede legitimar, como pretende la recurrente, el acceso a la totalidad del anexo II de la Resolución impugnada, debiendo quedar protegida su información bajo la declaración de confidencialidad. Mediante la Resolución impugnada se ha establecido un mecanismo en virtud del cual esta Comisión garantiza a los operadores interconectados con la red móvil que se conozca con antelación el precio cierto a pagar por terminación, sin que por ello se haya incurrido en las infracciones legales que ahora se le imputan.

En atención a todo lo anterior, deberán desestimarse las alegaciones esgrimidas en este motivo, pues las mismas carecen del fundamento necesario para la pretendida declaración de nulidad de la Resolución impugnada y sin que pueda apreciarse la vulneración de precepto constitucional o norma jurídica alguna al respecto que ampare su anulación.

### **Segundo.- Sobre los daños y perjuicios ocasionados por la Resolución impugnada.**

La entidad recurrente alega que, con la determinación de los precios de terminación, se perjudica, por un lado, a los abonados del servicio telefónico fijo por las continuas modificaciones en los precios a las que se verían inmersos, creando desconcierto frente a los otros abonados de telefonía móvil y, por otro lado, a los operadores de redes fijas que se verían perjudicados en su imagen respecto a sus clientes al comunicarles las continuas modificaciones de sus precios.

Con carácter previo, cabe señalar que no se invocan perjuicios propios que pudieran ocasionarse a la entidad recurrente por la Resolución recurrida. En el presente apartado se limita a exponer los supuestos perjuicios que se ocasionarían a clientes y operadores de redes fijas.

Frente a ello, se ha de contestar que Telefónica de España carece de legitimidad alguna para invocar perjuicios de terceros en beneficio propio. Además, debe destacarse que, para el caso de sus clientes, la Resolución recurrida supone una rebaja significativa en los precios, que, como ella misma dice, tendrá su reflejo en los precios finales, lo que dista mucho de producirles



## COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

perjuicio alguno. Por ello, esta Comisión reitera que el presente motivo de impugnación carece del mínimo argumento y motivación, sin olvidar el interés público que ostenta la Resolución recurrida para el mercado de las telecomunicaciones.

A mayor abundamiento, Telefónica de España a través de su escrito de recurso, tan sólo ha realizado una mera descripción sobre los posibles perjuicios en que se pudiera incurrir por las modificaciones de los precios de los operadores. Sin embargo, y a los efectos que ahora interesan, la recurrente no ha justificado ni evaluado los perjuicios que tendría con los precios determinados por la Resolución recurrida. En particular, no establece la relación entre la pérdida de imagen de Telefónica de España con los precios de terminación en los móviles, ni las condiciones en las que esta entidad debería asumir la reducción en los márgenes. Ante tales circunstancias, no se puede suponer que realmente exista una pérdida de imagen de Telefónica de España ante las modificaciones de los precios a los usuarios finales. Es más, y como ya se ha dicho anteriormente, esta circunstancia podría ser incluso una mejora de su imagen si los precios fueran menores como ha ocurrido en el presente caso.

En atención a todo lo anterior, cabe concluir que con la Resolución impugnada no se ha ocasionado perjuicio alguno a la recurrente. Por su parte, esta entidad no ha aportado otros datos que evidencien lo contrario, tan solo se ha limitando a alegar meras manifestaciones de parte carentes de prueba alguna, lo que conlleva necesariamente a la desestimación del presente motivo.

### **Tercero.- Sobre cuál debería ser el contenido de la Resolución impugnada.**

Por último, considera que los precios de terminación que han de abonar los operadores fijos a los operadores móviles por las llamadas fijo-móvil deben calcularse no llamada por llamada, sino aplicando la media ponderada que corresponda a cada operador en función de los precios establecidos por el operador móvil y del número de llamadas que terminen en su red, ya que, en este caso, el operador de telefonía fija no tendría la presión de trasladar de inmediato al cliente la modificación de las tarifas en todos los casos.

A juicio de Telefónica de España, si no se admite dicha propuesta, no será posible llevar a efecto la Resolución impugnada sin grave detrimento para los abonados de telefonía fija y para los operadores fijos. Con carácter subsidiario, solicita que, si no se aprueba su propuesta, se mantengan los precios acordados cautelarmente a través de la Resolución de 3 de octubre de 2003.

Cabe recordar a la recurrente que los operadores móviles declarados dominantes deben cumplir, entre otras, las obligaciones de transparencia y no discriminación: Es decir, tienen la obligación de ofrecer las mismas condiciones



## COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

a todos sus operadores interconectados en situaciones iguales. La propuesta de Telefónica de España es contraria a la obligación de no discriminación, pues, de acuerdo con ella, a cada operador se le fijaría un precio medio diferente en función del tráfico y precio obtenido en el periodo de cálculo de los ponderadores de los anexos II. Ello conllevaría a que operadores que estuvieran en la misma situación estarían siendo discriminados al ofrecérseles condiciones diferentes, pues pagarían precios medios diferentes. Por su parte, la propuesta de Telefónica de España también adolece de falta de transparencia, pues no se establecen las condiciones en las que cada operador debe pagar un precio de terminación de interconexión.

Por otra parte, y en cuanto a la pretensión sobre la aplicabilidad de los precios acordados cautelarmente a través de la Resolución de 3 de octubre de 2003, tan sólo cabe reiterar lo ya manifestado anteriormente a este respecto en el primero de los fundamentos de derecho de la presente Resolución, que damos por íntegramente reproducido en aras de la economía procesal.

Por todo ello, cabe concluir que no puede tener favorable acogida la propuesta ahora esgrimida por la entidad recurrente, puesto que, de acuerdo con lo manifestado a lo largo de la presente resolución, en nada afecta a la legalidad de la Resolución dictada en el procedimiento de referencia, sin olvidar que la referida propuesta iría en contra de los principios de transparencia y no discriminación que deberán cumplir los operadores móviles declarados dominantes.

En atención a todo lo anterior, y vistos los citados antecedentes y fundamentos jurídicos, esta Comisión

### RESUELVE

**ÚNICO.-** Desestima el recurso de reposición interpuesto por la entidad Retevisión Móvil, S.A. contra la Resolución de fecha 18 de diciembre de 2003, sobre la fijación de los precios de interconexión de terminación en la red de Retevisión Móvil, S.A. (MTZ 2003/1386), por estar plenamente ajustada a Derecho.

El presente certificado se expide al amparo de lo previsto en el artículo 27.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y el artículo 23.2 de la Orden de 9 de abril de 1997, por la que se aprueba el Reglamento de Régimen Interior de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, con anterioridad a la aprobación del Acta de la sesión correspondiente.

Asimismo, se pone de manifiesto que contra la Resolución a la que se refiere el presente certificado puede interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su notificación, de



## COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

acuerdo con lo establecido en el artículo 48.17 de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, la Disposición Adicional Cuarta, apartado 5, de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de lo previsto en el número 2 del artículo 58 de la misma Ley.

Vº Bº

EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO

Jaime Velázquez Vioque

Carlos Bustelo García del Real